JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D. C., ocho de agosto de dos mil veintitrés

REF: Tutela
RAD: 11001310302720230042300
Asunto: Sentencia

Decide el Despacho el fallo de tutela una vez vencido los términos del traslado a los accionados.

ANTECEDENTES

El ciudadano **CRISTIAN CAMARGO MARTINEZ** interpone acción de tutela en contra del teniente coronel **CARLOS MAURICIO PEÑA JIMENEZ** Oficial Encargado De Medicina Laboral **COPER**, Brigadier General **JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ** director de la **DIRECCION DE SANIDAD MILITAR EJERCITO NACIONAL** – mayor general **LUIS MAURICIO OSPINA GUTIÉRREZ** comandante del **EJERCITO NACIONAL**, con el fin que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia con fundamento en los siguientes hechos que se sintetizan así:

Ingresó al Ejército Nacional prestando servicio obligatorio como soldado, en septiembre de 2022, presentó síntomas de enfermedad endémica llamada leishmaniasis cutánea contraída mientras patrullaba San José del Guaviare.

El 6 de marzo de 2023 realizó junta médico laboral en el Batallón de sanidad en Apiay Meta, una vez terminada la junta le indicaron que 120 días después le notificaban el resultado.

En la Dirección de Sanidad Militar – COPER – le indican que deje dirección del correo electrónico, sin que a la fecha le hayan notificado los resultados de la junta médica laboral.

Admitida la tutela se dio traslado a las accionadas quien procedió a responder solo la Dirección General de Sanidad Militar indicando:

4. Esta Dependencia de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 352 de 1997, solo cumple funciones administrativas y no asistenciales, por lo que no tiene competencia en temas asistenciales tales como agendar citas, autorizar exámenes ni procedimientos médicos, ni realizar los mismos, y menos en cuestiones médico laborales como lo es la autorización y realización de conceptos, elaboración de ficha médica de retiro y/o realización de juntas médico laborales a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

De conformidad con lo anterior, es pertinente informar que una vez se ha llevado a cabo la junta médico laboral, la Oficina de Gestión de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en presencia del usuario levanta acta de la misma la cual es enviada a auditoria médica y digitación, y posteriormente, se entrega boleta de citación para la notificación del resultado de la junta médica laboral.

En este sentido, es deber informar que el Área de Medicina Laboral del Ejército Nacional está a cargo del señor Teniente Coronel **CARLOS MAURICIO PEÑA JIMENEZ**, Oficial Gestión Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, ubicado en la

carrera 46 N°. 20 C – 01, piso 1°, Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá D.C. y correo electrónico de notificaciones judiciales msjmlbcoper@buzonejercito.mil.co, a quien le asiste competencia para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la solicitud del señor accionante.

Por lo que solicita se desvincule la entidad por falta de legitimación en la pasiva.

Las demás accionadas guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con en el art. 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela se rige por los principios de subsidiaridad y residualidad. Con ellos, se pretende que, so pena de ser improcedente, la persona agote los mecanismos ordinarios existentes para la defensa de sus derechos a menos que con su uso se necesite evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, tales mecanismos no existan o existiendo no resulten idóneos y eficaces para la protección de los derechos.

Atendiendo los antecedentes del caso, corresponde al Despacho determinar si las accionadas amenazan los derechos invocados por el señor Cristian Camargo Martínez, debido proceso y acceso a la justicia, como consecuencia de la falta de notificación de los resultados de la junta médica laboral.

Referente al derecho a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, el ordenamiento jurídico impone que el estado de invalidez se determine a través de una valoración médica que conlleva a una calificación de la pérdida de la capacidad laboral, cualquiera que sea su origen (común o laboral). Esta calificación debe ser realizada por las entidades autorizadas por la ley. Con dicha calificación se dictamina el porcentaje de afectación, el origen de la pérdida y la fecha en la que se estructuró. De esta manera, su determinación tiene como propósito la garantía de diversos derechos fundamentales: la salud, la seguridad social y en muchos de los casos, dependiendo de las circunstancias particulares, la vida y el mínimo vital.

Tanto la Ley 100 de 1993 como los regímenes especiales para el caso en estudio la Ley 1795 de 2000 creados por la Constitución imponen unas obligaciones a cargo de las entidades del Sistema de Seguridad Social, siendo el deber de garantizar, el estado de invalidez se determina a través de una valoración médica que conlleva a una calificación de la pérdida de capacidad laboral, calificación que debe ser realizada por las entidades autorizadas por la ley, como pasa a señalarse:

“...Sistema de salud de las Fuerzas Militares. Régimen especial

De conformidad con los artículos 216 y 217 de la Constitución Política, el Legislador excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y, en este sentido, expidió la Ley 352 de 1997- sistema que fue posteriormente estructurado por el Decreto 1795 de 2000.

Este régimen, a su vez, se encuentra compuesto por el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares - SSFM- y el Subsistema de Salud de la Policía Nacional -SSPN-, administrados por la Dirección de Sanidad de cada institución, de acuerdo con la ley.

En lo que se refiere a la población beneficiada, la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000 señalan las siguientes personas:

- Los afiliados sometidos al régimen de cotización que son: (a) los miembros de las

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo o que gocen de asignación de retiro o pensión, (b) los soldados voluntarios, (c) los servidores públicos y los pensionados de las entidades Descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado activo y pensionado de la Policía Nacional; y (d) los beneficiarios de una pensión por muerte o de asignación de retiro, según sea el caso, del personal previamente señalado.

- Los afiliados no sometidos al régimen de cotización del cual hacen parte (a) los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional; y (b) las personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio

De otro lado, el dictamen de pérdida de capacidad laboral general y Junta Médico-Laboral Militar para los miembros inactivos del Ejército Nacional, se encuentra regulado por el Decreto 1507 de 2014. Respecto a los integrantes de las Fuerzas Militares, la valoración de la pérdida de capacidad laboral es realizada por la Junta Médico-Laboral Militar y se rige por el Decreto 1596 de 2000, el cual regula la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la policía nacional.

Así mismo, el artículo 15 establece las funciones de la Junta, entre otras la de **“Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas”**.

Por su parte, el artículo 16 del mencionado decreto establece los soportes de la Junta Médico-Laboral, los cuales son:

- a. La ficha médica de aptitud psicofísica.
- b. El concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o afecciones que presente el interesado.
- c. El expediente médico – laboral que reposa en la respectiva Dirección de Sanidad.
- d. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar.
- e. Informe Administrativo por Lesiones Personales.

Una vez recibidos los conceptos médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes, la Junta Médico Laboral se deberá realizar a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes.

La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de esta valoración para el reconocimiento de las pensiones de invalidez, reiterando que:

“Tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. Adicional a ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que originan la disminución de la capacidad laboral. Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los organismos médicos competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, ésta arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De allí que la evaluación forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría fundamento para el reconocimiento pensional”¹

La calificación de la pérdida de capacidad laboral está consagrada como un derecho para proteger otros derechos fundamentales de las personas. Por lo que

¹ Sentencias T-038 de 2011 y T-165 de 2017.

su vulneración puede presentarse por tres circunstancias: ante la negación al derecho a la valoración, ante la negativa en su actualización o por la demora injustificada y siempre que no sea imputable a la negligencia del sujeto interesado.

La inobservancia de los preceptos legales y la negativa por parte de las entidades obligadas a realizar la valoración de la pérdida de incapacidad laboral de la persona cuando su situación de salud lo requiere, configuran una transgresión del derecho a la seguridad social.

De igual forma, se establecen obstáculos para el goce de las garantías fundamentales a la salud, la vida digna y el mínimo vital al impedir determinar el origen de la afección y el nivel de alteración de la salud y de la pérdida de capacidad laboral del trabajador o del usuario del sistema.

La calificación por la pérdida de capacidad laboral constituye una obligación derivada del Sistema de Seguridad Social, por tanto, los conflictos que puedan surgir entre las entidades se encuentran obligadas a emitir tal dictamen y el afiliado que lo solicita.

En este punto, se advierte que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional – Coper –, guardaron silencio cuando se les corrió traslado de la acción. De esta manera, señalar que, ante la falta de respuesta por parte de las entidades accionadas, es procedente dar aplicación a la presunción de veracidad.

El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dispone que las entidades accionadas tienen la obligación de rendir los informes que les sean solicitados en desarrollo del proceso de tutela dentro del plazo otorgado por el juez, por lo que, si dicho informe no es rendido dentro del término judicial conferido, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial crea conveniente otra averiguación previa.

Al respecto, esta corporación en la sentencia T- 661 de 2010 señaló: *“En este último evento, se decretarán y practicarán las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de fondo, pues como se ha señalado en otras oportunidades no puede el juez de tutela precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, sino que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante la adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente de los hechos y aspectos jurídicos sobre los cuales habrá de pronunciarse.”*

En tal sentido, obsérvese que la presunción de veracidad es concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas.

Adicionalmente, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (artículos 2º, 6º, 121, 123 inciso 2º de la Constitución Política).

Así las cosas, debe advertirse que, conforme a la citada jurisprudencia T – 258 de 2019, son beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, las

personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio. Así mismo, se ha determinado que la atención en salud de los miembros de la fuerza pública debe extenderse aquellos sujetos que han sido retirados del servicio activo, estando supeditada su continuidad a la necesidad de la prestación del servicio por el tiempo que resulte necesario.

Ello por cuanto se ha reiterado que, si una persona ingresa a prestar sus servicios a la fuerza pública y lo hace en condiciones óptimas pero en el desarrollo de su actividad sufre un accidente o adquiere una enfermedad o se lesiona y esto trae como consecuencia que se produzca una secuela física o psíquica y, como resultante de ello, la persona es retirada del servicio (...) los establecimientos de sanidad deben continuar prestando la atención médica que sea necesaria, siempre que de no hacerlo oportunamente pueda ponerse en riesgo la salud, la vida o la integridad de la persona.²

De lo obrado en el plenario, se tiene que el señor Cristian Camargo Martínez, agotó los trámites de su alcance para solicitar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, acudiendo a las entidades accionadas de la cual ya le fue realizada la junta médico laboral, no obstante, no le han notificado los resultados del mismo, esto es, el concepto o la resolución que debe emitirse con el estudio de la calificación médica.

Lo anterior da cuenta el obstáculo que ha tenido el peticionario para conocer del resultado de la calificación médica laboral, a fin de dar inicio al trámite que éste conlleve frente a la calificación dada por los médicos, de ahí que el accionado no ha garantizado los derechos que tiene el accionante a fin de obtener favorable o no sobre la práctica de la valoración de la pérdida de capacidad laboral.

La Corte Constitucional ha reiterado la importancia del derecho que tienen las personas dentro del Sistema de Seguridad Social de recibir una calificación de su pérdida de capacidad laboral. Por tanto, todo acto dirigido a dilatar o negar injustificadamente su realización es contrario a la Constitución y al deber de protección de los derechos fundamentales en que ella se funda.

Al respecto señaló: la calificación de la pérdida de la capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren vinculadas. Esto con el fin de garantizar los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral.³

De tal manera, considera este Despacho Judicial la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos del accionante de conocer los resultados de la junta médica laboral, la cual no solo estarían violando los derechos invocados al debido proceso, acceso de justicia, sino también el derecho de petición, salud, igualdad, dignidad humana y seguridad social.

Por lo expuesto, el **JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO** de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: **CONCEDER** el amparo constitucional al debido proceso, acceso a la justicia que invocó el ciudadano **CRISTIAN CAMARCO MARTÍNEZ**, y los derechos constitucionales de petición y seguridad social.

² Sentencia de la Corte Constitucional T - 258 de 2019.

³ Sentencia T-250-22

Segundo: **ORDENAR** a teniente coronel **CARLOS MAURICIO PEÑA JIMENEZ** **Oficial Encargado De Medicina Laboral COPER**, mayor general **LUIS MAURICIO OSPINA GUTIÉRREZ** comandante del **EJERCITO NACIONAL**, (a través de la dependencia correspondiente) que, en un término máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a resolver lo pertinente, sobre la solicitud de la pérdida de capacidad laboral del accionante.

Tercero: **COMUNICAR** la presente decisión a las partes por el medio más expedito, de conformidad con lo preceptuado en el art. 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: **REMITIR** las actuaciones a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 027 Escritural

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d02d6d28d6f1a667cd3fcede5bb420b2c0810c6620720dedae8fa3e543f8af77**

Documento generado en 08/08/2023 08:02:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>